**REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO
DISTRITO JUDICIAL DE SANTA MARTA**

Santa Marta, Tres (3) de Diciembre de Dos Mil Veinte (2020)

Rad. T. 47001 4053 005 2020 00365.01

Procede el Despacho a decidir la **IMPUGNACIÓN** planteada contra el fallo proferido por el **JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA** dentro de la acción de tutela impetrada por **SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ ANDRADE** contra **TIGO**, a la que fueron vinculados **DATACRÉDITO** y **TRANSUNIÓN**.

ANTECEDENTES DE LA DECISIÓN

Manifiesta la actora que cuando se dirigió a solicitar un crédito para la adquisición de una vivienda digna para sus hijos, encontró que fue reportada por TIGO ante las Centrales de Riesgo Datacrédito y Transunión, omitiendo lo prescrito en el Art. 12 que expresa que la entidad debe seguir un proceso administrativo con las obligaciones contraídas por los ciudadanos, ya sea que estén canceladas o se encuentren en mora, y debe ser comunicado con 20 días de anticipación al reporte negativo. Hecho que no ocurrió en este caso.

Agrega que se dirigió a las Centrales de Riesgo ya mencionadas, para que le eliminaran el reporte negativo, pero no fue posible porque la entidad arriba mencionada se lo impidió y las Centrales nunca aceptaron sus peticiones.

Señala que la entidad crediticia la reportó sin justa causa, nunca le avisaron con días de anticipación como lo exige la Ley, ni por correo certificado ni electrónico, para ponerse al día con la obligación y no ser reportada, con la excusa de que para la época de los hechos no existía la Ley de Habeas Data cuanto eso no es cierto.

Por último expresa que las accionadas están abusando de su posición dominante en el mercado financiero y crediticio, impartiendo un modelo de justicia privada de por vida en su contra, pues se encuentra en estado de indefensión económica a lo que se le sumaría una sanción moral o cobro público eterno por parte de dichas entidades, por lo que implora el resguardo de sus derechos fundamentales de habeas data, buen nombre, salud, impedimento de adquisición a vivienda digna, debido proceso y dignidad.

La actora aporta con el escrito de tutela, las peticiones dirigidas a las accionadas, así como la respuesta de Transunión.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Y SU IMPUGNACIÓN

Admitida la acción de tutela por el A-quo, acudió al llamado **DATA CRÉDITO**, quien sostuvo que la historia de crédito de la accionante expedida el 1º de octubre pasado, refleja una obligación impaga con COLOMBIA MOVIL TIGO. Por ello no pueden proceder a su eliminación, pues se trata de una situación actual de impago. Que una vez la petente cancele su obligación, reflejará que esta ha sido satisfecha, pero la mora quedará registrada por un término equivalente al doble del tiempo, de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de la Ley 1266 de 2008.

Sostienen que en calidad de operador de información, tienen el deber de realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos que reporten las Fuentes. Que en cuanto a la notificación previa, esta le compete hacerlo a la Fuente, ya que es esta quien tiene una relación financiera o comercial con el titular de la información. Por lo anterior, consideran que el presente trámite no está llamado a prosperar y por tanto solicitan se les desvincule y se niegue la tutela.

TRANSUNIÓN, luego de explicar sus competencias, expresa que el 30 de septiembre del año pasado, procedieron a revisar el reporte de información financiera, comercial, crediticia y de servicios de esa entidad, a nombre de la accionante, encontrando que con relación a TIGO se evidencia la obligación No. 664223, en mora, con vector de comportamiento 14, es decir, con mora de 730 días en adelante.

Expresan que no es viable condenarlos cuando en su calidad de operador no pueden modificar, actualizar y/o eliminar la información, sin instrucción previa de la Fuente, a quien le compete cumplir con el requisito de la notificación previa al reporte de información negativa ante el operador, y allegar la prueba del envío de la misma, pues de hacerlo de manera unilateral, lesionarían el principio de calidad de la información que establece el Art. 3º de la Ley de habeas data.

Narran que el 30 de enero de 2019, dieron respuesta oportuna, clara y completa a la petición radicada el 9 de ese mismo mes y año, por lo que solicitan se les exonere y desvincule de la presente tutela. Aportan copia de la respuesta remitida al actor.

Por su parte, **COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.** en adelante **TIGO**, comunicó que ante el reporte que reposa en las Centrales de Riego, la accionada cumplió con los requisitos legales establecidos para ello.

Agregan que en su sistema de gestión e información, registra que la accionante cuenta con la obligación 8914664223, en la que se facturó el

plan de financiación por compra del equipo Samsung Galaxi S5 mini black LTE con IMEI 353923060114655, adquirido con el contrato de compraventa con pago a cuotas No. C000118640 (anexan copia de dicho contrato). Señalan que con la suscripción de los mencionados contratos, el usuario autoriza expresamente para consultar y reportar ante las Centrales de Información, para conocer el desempeño como deudor, capacidad de pago o valorar el riesgo futuro. (anexa los términos de dicha autorización).

Que respecto al comportamiento del pago a plazos, en principio se facturó en la cuenta 8905740544 asociada a la línea 3005385497 y que a partir de agosto de 2015 se facturó en la cuenta 8914664223, asociada a la referencia 5005385497, en la que registra únicamente un pago efectuado por la usuaria y a la fecha tiene un saldo pendiente por valor de \$473.031.00, agregando que la Compañía informó de la deuda y del reporte ante Centrales de Riesgo, por medio de las facturas y en este caso le fue informado a la petente en la factura BI-0116433414 de septiembre de 2015, en la que se le indicó que su factura presentaba mora, invitándolo a cancelarla a la mayor brevedad posible, de lo contrario sería reportada ante las Centrales de Riesgo. (anexan copia de la factura en mención).

Dicha factura le fue enviada a la dirección reportada en el contrato de compraventa. Como prueba anexan la planilla de correo con firma de recibido.

En cuanto al derecho de petición impetrado por la actora el 5 de diciembre de 2018, la accionada le respondió el 22 de diciembre del mismo año, y anexan copia de dicha respuesta, manifestando que la misma le fue remitida a su correo electrónico, demostrándolo con la guía de envío y entrega que aportan.

También expresan que la usuaria presentó otro derecho de petición, adjunto con el escrito de tutela, ante lo cual la accionada le respondió el 13 de febrero del año que cursa, en donde luego de hacer un recuento y manifestarle que hay constancia del envío y entrega de facturas, concluyen que no hay lugar a actualizar la obligación ante las Centrales de Riesgo. Dicha respuesta le fue remitida a su correo electrónico, demostrándolo con la constancia de guía de envío y entrega.

Por lo anterior, consideran que la presente acción de tutela no debe prosperar, por cuanto no han vulnerado derecho fundamental de la accionante, en razón a que respondió sus peticiones de fondo, clara, completa, oportuna y congruente con lo pedido, además cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley 1266 de 2008.

El trámite finalmente culminó al proferirse el respectivo fallo, donde se decide negar el amparo solicitado por **SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ ANDRADE**, tras considerar el A-Quo, que respecto a los derechos de petición y habeas data no han sido vulnerados por la accionada, ya que se acreditó que esta cumplió con el deber exigido por el Art. 12 de la Ley 1266 de 2008, que indica entre otras cosas que el preaviso se puede ejercer a

través de los extractos periódicos que las Fuentes de información envíen a sus clientes, entendiéndose estas como las facturas de cobro. Lo que quiere decir que la actora al momento de presentar la acción de tutela, ya tenía conocimiento del estado de su mora y del reporte ante las Centrales de Riesgo, ya que la accionada acreditó haberle enviado la factura a la dirección reportada por la tutelante en el contrato de compra venta.

Que en cuanto a las Centrales de Riesgo, manifiesta que las mismas no tienen injerencia en la relación comercial entre la entidad acreedora y la parte deudora, además que los datos expuestos por la accionada coinciden con los consignados en dichas entidades.

En lo referente al derecho de petición, pese a que la actora no acreditó haberle enviado solicitudes a las vinculadas, su comportamiento demuestra que si lo recibieron, por cuanto Transunión respondió y así lo acreditó la actora al momento de presentar la tutela. Datacrédito no se pronunció pero la accionante tampoco demostró que le haya efectuado petición, por lo que en este caso no se logró determinar si hubo omisión de dicha parte.

Inconforme con la anterior decisión la accionante, impugna el fallo al no estar de acuerdo con lo decidido, alegando que las accionadas nunca le notificaron, violando lo establecido en el Art. 12 de la Ley de Habeas Data.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El legislador constitucional dotó a los conciudadanos de una acción preferente y sumaria para la salvaguarda de sus derechos fundamentales cuando estos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular que preste un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes se hallen en estado de subordinación o indefensión. La procedencia de este amparo está supeditada a la inexistencia de otra vía judicial para la defensa de sus derechos, por ello se predica que es una acción residual o subsidiaria.

Dado que se acciona en contra de personas jurídicas de derecho privado, se hace imperioso dilucidar a cerca de la viabilidad de ello, para lo cual debemos tener en cuenta que en desarrollo del artículo 86 de la Carta Magna, que amplía la posibilidad de presentar acción de tutela contra particulares, en razón de lo cual el artículo 42 del decreto 2591 de 1991 señala tres situaciones:

- Que el particular esté encargado de un servicio público.
- Que la conducta del mismo afecte gravemente el interés colectivo.
- Que respecto de ellos el solicitante se halle en estado de indefensión e insubordinación.

La tutela contra particulares está sustentada en el hecho que los derechos fundamentales de las personas vinculan a los particulares al igual que al Estado, aunque no sea del mismo grado, por ello el legislador delimita los eventos en que esta procede: por ser un caso de tutela contra particulares a los que se refiere el inciso último del artículo 86 de la Constitución Nacional que a su vez remite a los eventos que señale el legislador y que éste hizo a través del Decreto 2591 de 1991 en su artículo 42, tendríamos que examinar si encuadra en alguno de los eventos que señala dicha norma.

En el caso sub lite, la actora se encuentra en estado de indefensión frente a TIGO, DATACRÉDITO y TRANSUNIÓN, tratándose de una relación contractual que en principio no presupone una relación de subordinación, sin embargo, las mismas tienen la posibilidad, o de facto lo hacen, de efectuar reportes negativos, ante las Centrales de Riesgos, de quien la accionante demanda le sea eliminado el dato negativo reportado, y ello si la coloca en estado de indefensión, y por tanto hace viable la intervención del Juez constitucional.

Con relación a la protección constitucional del artículo 15 de la Constitución Política, ha señalado la Honorable Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos¹, que el Habeas Data es el derecho que tienen todas las personas a *"conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas"* y que las instituciones de crédito tienen derecho a conocer la solvencia económica de los usuarios de los servicios financieros, ya que los agentes financieros o las instituciones crediticias, precisamente por manejar el ahorro del público, ejercen una actividad de interés general, siendo el derecho de las entidades financieras en cuanto al uso de los datos de los clientes, naturalmente limitado, esto es, sólo pueden transmitir información veraz y completa sobre el deudor.

Así mismo, ha señalado la doctrina constitucional, que el núcleo esencial del Habeas Data está integrado por el derecho a la autodeterminación informática y por la libertad, en general y en especial la económica; en este sentido, la autodeterminación implica una facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación uso y circulación, de conformidad con las regulaciones legales, pudiéndose afectar la libertad económica de una persona cuando la circulación de datos no sea veraz o que tal circunstancia haya sido autorizada expresamente por el titular de los datos; por lo tanto, en virtud del tránsito de los mismos se pueden conculcar derechos fundamentales de los ciudadanos.

En ese orden de ideas, el derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que puede ser utilizado para revelar datos que lesionen la honra y el buen nombre de las personas. La información en los términos del ordenamiento superior, debe corresponder a la verdad, ser verídica e imparcial, pues no existe derecho a dirigir informaciones que no sean ciertas

¹ T-462 de 1997, T-114 de 1993, SU-008 de 1993, T-022 de 1993, T-94 de 1995, T-97 de 1995, T-110, T-127 de 1994, T-197 de 1994, T-303 de 1998.

y objetivas. En este sentido, mientras las informaciones sobre un deudor sean fidedignas, verídicas y completas, no se puede afirmar que el suministro y la circulación de los datos a quienes tienen un interés legítimo en conocerlos vulneren el buen nombre de su titular.

El artículo 15 superior establece tres derechos con sus dimensiones específicas a saber: el derecho a la intimidad, al buen nombre y al Habeas Data, este último relacionado, en buena medida con los antecedentes de carácter crediticio o económico, por lo que la información que obre en la base de datos, conforme al artículo 15 superior, puede ser objeto de varias acciones por parte de los ciudadanos, esto es, conocida la información pertinente el titular puede solicitar "la actualización o la rectificación"; en el primero de los eventos, la actualización hace referencia a la vigencia de la información de tal manera que no se muestren situaciones carentes de actualidad, al tiempo que en la segunda hipótesis puede solicitar la rectificación que no es otra cosa que la concordancia del dato con la realidad; bajo esta perspectiva, se debe recordar que la información que se conserva en la base no desconoce el derecho al buen nombre, prerrogativa que comporta una relación directa esencial con la actividad personal o individual y social del sujeto afectado. Luego, si el ciudadano o la persona jurídica, no conserva el buen nombre, por ejemplo al hacer mal uso de los servicios financieros y en general de sus obligaciones civiles, comerciales y financieras, a las que accede, y si así es reportado en las certificaciones emitidas por las entidades encargadas de suministrar información sobre solvencia económica no se estaría violando tal derecho, siempre y cuando la información emanada de la entidad sea veraz; en otras palabras, sólo se desconoce el derecho al buen nombre cuando la información suministrada por la entidad pertinente, registre un hecho o un comportamiento carente de veracidad. En consecuencia, si los datos económicos de carácter histórico son fidedignos y muestran el comportamiento crediticio de un sujeto, no pueden violar el derecho al buen nombre, pues en caso contrario, se estaría protegiendo en pie de igualdad, a quienes cumplen con sus obligaciones, frente a quienes no lo hacen, no habiendo entonces una diferencia de trato entre la probidad comercial y el manejo descuidado de estos asuntos, lo cual se constituiría en un ejercicio abusivo y arbitrario de las decisiones judiciales.

De igual manera ha fijado en el caso de la procedencia de la acción de tutela para invocar el amparo del derecho fundamental al habeas data como requisito previo, que el peticionario haya acudido a la entidad correspondiente para corregir, aclarar, rectificar o actualizar la información que se tenga de él, conforme se desprende del contenido del artículo 42, numeral 6° del Decreto 2591 de 1991.[\[5\]](#)

En ese mismo sentido, el numeral 6° del literal II del artículo 16 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, preceptúa: *"Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos*

legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida (...)”

Es decir, que la acción de tutela es el mecanismo procedente para solicitar el amparo del derecho fundamental al habeas data contra un particular, cuando se evidencia el estado de indefensión frente al mismo y se verifica que el peticionario elevó la correspondiente solicitud de aclaración, corrección, rectificación o actualización del dato ante la entidad correspondiente.

Descendiendo al caso en estudio, con respecto al cumplimiento del requisito previo para examinar la procedencia de la acción de tutela en los casos en los que se invoca la protección del derecho fundamental al habeas data, esto es, que el peticionario haya acudido a la entidad correspondiente para corregir, aclarar, rectificar o actualizar la información que se tenga de él, se observa que la accionante acudió ante la accionada y las vinculadas para solicitar la fecha exacta en que se efectuó el reporte negativo, copia de la autorización firmada por ella para realizarlo, y de los títulos valores que rubricó, donde conste la relación comercial de las partes y por ende la obligación hasta la fecha, precisándole si fue cancelada o no, peticiones que reposan en el expediente a folios 4-5, 11-12 y 13-14 del expediente digital, sin constancia de recibido, de igual manera anexa la respuesta de Transunión, razón por la cual se tiene acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción de tutela.

A fin de dilucidar el caso puesto en conocimiento de esta dependencia judicial, al tratarse de una supuesta omisión de las entidades accionadas, al efectuar el reporte negativo, se trae a colación el artículo 12 de la Ley 1266 de 2008:

“Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley.

El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de bancos de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes.

En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización y ésta aún no haya sido resuelta.”

De la norma transcrita, se desprende la consideración doctrinaria constitucional, en razón de la cual, es obligatorio que las entidades o las fuentes de información, comuniquen a los titulares de la información antes de que hagan el reporte a las Centrales de Riesgo.

Examinadas las pruebas que obran en el plenario, se vislumbra que hay constancia que COLOMBIA MÓVIL E.S.P.- TIGO, le remitió a la accionante la comunicación previa al reporte negativo, por medio de las facturas de septiembre de 2015, en la que se le indicó que su factura presentaba mora, invitándolo a cancelarla a la mayor brevedad posible, de lo contrario sería reportada ante las Centrales de Riesgo, la que le fuera enviada a la dirección reportada en el contrato de compraventa.

Así mismo fue acreditado que respondieron los derechos de petición impetrados por la actora: El del 5 de diciembre de 2018, le respondió el 22 de diciembre del mismo año y el otro el 13 de febrero del año que cursa. Dichas respuestas le fueron remitidas a su correo electrónico, demostrándolo con la constancia de guía de envío y entrega. De igual Manera se comprobó que Transunión respondió su derecho de petición, pues el mismo fue aportado con el escrito de tutela. No sucedió lo mismo con Datacrédito, pero tampoco fue acreditado que efectivamente esta hubiese recibido dicha petición. En ese sentido, habrá de confirmarse el fallo venido en alzada.

En mérito de lo que ha sido considerado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: **CONFIRMAR** el fallo de tutela de calendas 7 de octubre de 2020, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE SANTA MARTA, dentro de la acción de tutela seguida por **SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ ANDADRE** frente a **TIGO**, y las vinculadas **DATACRÉDITO y TRANSUNIÓN**.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes intervinientes por el medio más expedito posible. Remítase copia del fallo al Juez de primera instancia.

TERCERO: Envíese el presente fallo junto con el expediente del que hace parte a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase.

Mónica Gracias

MÓNICA GRACIAS CORONADO
Jueza